El que Lenin Moreno haya sido candidato oficialista, además de haber formado parte del gobierno de Rafael Correa, implica que ha estado involucrado o compartido la firma de convenios del 2012 (entre el Magap y la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal, para aumentar la productividad sobre la base de semillas certificadas), del 2016 con los procesos de transformación en el agro (énfasis en productos transgénicos, transferencia tecnológica y "criterio" gerencial en la producción), la aprobación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales el 2016 (posicionó el discurso de la productividad por sobre la distribución de la tierra), la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea en 2016 (apertura del Ecuador al mercado internacional), y en la propuesta de la Ley de Semillas e investigación con cultivos transgénicos. En este marco, se puede apreciar que la propuesta electoral de Lenin Moreno orientado al sector agrícola no cambia la línea de trabajo de Rafael Correa descrito anteriormente, es decir, se mira a la agricultura como sector orientado a la producción para exportar, aumentar la productividad de los pequeños y medianos productores, la apertura comercial a mercados internacionales (EE.UU.), todo esto bajo la tutela del Estado, como actor de la transformación del agro, no así la agricultura familiar campesina e indígena que no representaría un actor con iniciativas.

Consecuentemente, al darse énfasis a la exportación (con mejores precios) puede ponerse en riesgo la disponibilidad de alimentos y enfrentar mayores precios de los mismos en el mercado interno, porque podría generarse un escenario en el que la demanda de alimentos sea mayor a la oferta, es decir, se podría afectar negativamente la dimensión disponibilidad (con soberanía) y acceso económico de la seguridad alimentaria. Otro posible problema que puede generarse es que al promover la apertura comercial, la soberanía alimentaria queda en discusión, pues los acuerdos de libre comercio podrían permitir importaciones masivas de alimentos (más baratos y de mejor calidad) producidos en los países desarrollados (Unión Europea, EE.UU), puesto que aun tecnificando los procesos productivos y aumentando la productividad agrícola en Ecuador, la producción de alimentos a escala y con mayor innovación que caracteriza a los países desarrollados (con los cuales mantiene acuerdos comerciales o de libre comercio), acabarían desplazando (por precio y calidad) a los alimentos producidos en Ecuador, sobre todo a los que provienen de la agricultura campesina, indígena y comunitaria.

Por tanto, uno puede deducir que las políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria en Ecuador no necesariamente pasarán por la soberanía alimentaria o al menos implicará una soberanía alimentaria relativa (no todo lo que se consume se importará), es decir, consumir alimentos producidos en Ecuador e importados de países con los cuáles mantiene acuerdos comerciales o de libre comercio. La dimensión acceso económico podría beneficiarse con los precios bajos de alimentos importados, pero también la tecnificación de la producción agrícola en Ecuador y la importación de alimentos podrían generar mayor desempleo, sobre todo en el área rural, y por ende obstaculizar el acceso a los alimentos.

Lo expuesto anteriormente, me lleva a plantear serias dudas sobre la realización de un pacto ético por el campo, a pesar de ser muy necesaria, al estar involucrando alrededor de dos millones de personas que dependen de la actividad agrícola y pecuaria. No hay que olvidar un par de hechos históricos: 1) que tanto en el Informe del CIDA de 1965 como en la publicación del Magap (2016), 50 años después, se sigue considerando la misma preocupación: la responsabilidad histórica de seguir postergando las demandas del sector agropecuario (el CIDA haciendo énfasis en la importancia de resolver el problema de la tenencia de la tierra; el Magap de atender necesidades de la agricultura familiar campesina); 2) que la participación del sector agrícola en el PIB ha ido disminuyendo, así como su financiamiento, pues ha tenido mayor financiamiento la agricultura comercial y no a si la agricultura familiar, a pesar de que esta última concentra al 62% de la población ocupada en la zona rural y produce 97% de los alimentos que consumen los ecuatorianos. Asimismo, se debe tener presente que la agenda de Lenin Moreno estará más concentrada en problemas relativos a la recesión económica y a la corrupción, alrededor del cual han puesto énfasis en la campaña electoral.

Finalmente, tengo optimismo de que en el presente curso podamos nutrirnos de las herramientas necesarias como para plantear al menos lineamientos de políticas públicas para permitir que las poblaciones más vulnerables puedan tener acceso a los alimentos, tanto en Ecuador como en Bolivia.